



== I-XI LEGISLATURA ==  
== SAN LUIS POTOSÍ ==

**INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS**  
**UNIDAD DE INFORMATICA LEGISLATIVA**

---

# **LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

---

**Fecha de Aprobación:** 06 DE SEPTIEMBRE DE 2012  
**Fecha de Promulgación:** 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012  
**Fecha de Publicación:** 20 DE OCTUBRE DE 2012

**Estimado Usuario:**

La edición de las disposiciones jurídicas del ámbito Federal o Estatal, en medios electrónicos no representa una versión oficial, ya que de acuerdo al artículo 3º del Código Civil Federal, los artículos 2º, 3º, 4º y 8º de la Ley del Diario Oficial de la Federación, los artículos 3º, 4º y 5º de la Ley del Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, y el artículo 2º del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí, las únicas publicaciones que dan validez jurídica a una norma es el propio Diario Oficial de la Federación, la Gaceta Oficial del Distrito Federal o los Periódicos Oficiales Estatales, en este caso el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí.

## LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

TEXTO ORIGINAL

*Ley publicada en el Periódico Oficial, El Sábado 20 de Octubre de 2012.*

FERNANDO TORANZO FERNANDEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a sus habitantes sabed:

Que la Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí decreta lo siguiente:

### DECRETO 1157

## LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### EXPOSICION DE MOTIVOS

Los documentos se constituyen en el testimonio del trabajo realizado por las instituciones del Estado, al dejar constancia de las acciones diarias; al mismo tiempo que dan sustento y formalidad a las actividades y acuerdos que se llevan a cabo cotidianamente.

Para que los acervos documentales se conserven correctamente, es necesario que sean depositados en archivos. La Asociación Civil Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, define a los archivos como el "conjunto orgánico de documentos reunidos por personas, organismos jurídicos, públicos o privados en el ejercicio de sus actividades al servicio de la gestión administrativa y de la utilización para la información, investigación y la cultura". Por otro lado, el Consejo Internacional de Archivos (ICA por sus siglas en inglés) señala que "los archivos representan una riqueza sin precedentes. Son la documentación del producto de la actividad humana y como tal, representan un testimonio irremplazable de acontecimientos pasados. Garantizan el funcionamiento democrático de las sociedades, la identidad de los individuos y de las comunidades así como la defensa de los derechos del hombre".

Por lo cual conservar el acervo documental no solo brinda testimonio de actividades cotidianas en las instituciones, sino que implica establecer las bases para ejercer la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, oportunamente.

En el año del 2003 entró en vigor en México la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LAI), con esta acción se dieron los primeros pasos hacia la consolidación de gobiernos responsables que rinden cuentas a la ciudadanía, acto de suma importancia para cimentar la vida democrática del país.

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizó en el año 2004 un diagnóstico posterior a la publicación de la LAI. En este estudio se señala que el acceso a la información es un acierto en la formación del nuevo contexto político y social del país, promueve la conformación del diálogo de la sociedad civil con los funcionarios públicos mediante la aplicación de la ley por parte de la ciudadanía. Sin embargo, este estudio señala que la ley se concentró en el principio de acceso a la información, postergando las condiciones necesarias para asegurar su adecuada implementación y funcionamiento. El desconocimiento y la falta de recursos humanos capacitados en el manejo de los archivos y la información dentro de las instituciones, representaron los primeros obstáculos para el buen funcionamiento de la Ley de Acceso a la Información.

Como se señaló, si bien la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada como nueva ley en el Diario Oficial de la Federación del 11 de junio de 2002, y la propia del Estado de San Luis Potosí, del 20 de marzo de 2003, se tradujeron en acciones decididas y tendientes para hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública, fue la reforma del 20 de julio de 2007 que adicionó un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6° de la Constitución General de la República, la que elevó a rango constitucional el derecho de las personas de acceder a la información en posesión del gobierno.

La regulación para el ejercicio de esta importante prerrogativa hizo necesario que se dictaran disposiciones destinadas a la preservación de los documentos en archivos administrativos actualizados; tal y como se desprende de lo preceptuado por la fracción V del párrafo segundo del artículo 6° constitucional; base que es adoptada por la vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, a través de la fracción IV de su artículo 2°.

Sin embargo, el ejercicio diario de la transparencia mostró que no es suficiente que el derecho a su acceso esté garantizado por la Ley, sino que es necesario que existan las condiciones materiales y técnicas para poder ejercerlo. Debido a esto, el 23 de enero del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Archivos; los argumentos principales que expresaron los legisladores que aprobaron el dictamen que la expide, es el reconocimiento a la importancia en conceptos claves para la democracia, tales como la rendición de cuentas, el acceso a la información y la transparencia. Sostuvieron que el valor de los archivos debidamente organizados y conservados, así como la posibilidad de administrar eficientemente la información que genera y recibe una organización, mejora la calidad de los procesos de decisión y de las actividades gubernamentales, abriendo la posibilidad de planear a largo plazo, asegurar la continuidad de políticas y prestar servicios de mejor calidad. La disponibilidad y la conservación de los documentos como evidencia de lo que se hizo en el pasado, además de documentar la memoria de la institución, permite proteger a esta última de problemas legales, administrativos, fiscales o contables, además de hacer más eficiente la toma de decisiones y la planeación estratégica de cualquier organización, y reducir los costos administrativos y operativos.

En cuanto al ámbito local, el 18 de octubre del 2007 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí el Decreto 234 por el que se reformó la Constitución Política del Estado, y se expidió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad, vigente a partir del 18 de abril de 2008 y hasta nuestros días.

En cuanto a la reforma constitucional, esta adicionó el artículo 17 Bis para establecer como prerrogativas de las personas, el acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales, creándose al mismo tiempo la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), como órgano constitucional autónomo responsable de garantizar el ejercicio de las citadas prerrogativas y de vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado; e igualmente previniendo la existencia de un Sistema Estatal de Documentación y Archivos (SEDA), responsable de aplicar las regulaciones que se establezcan en materia de administración y sistematización de la documentación e información, en posesión de las entidades públicas.

Por lo que respecta a la expedición de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, de acuerdo con el artículo 2° del Decreto 234, dicho cuerpo normativo fue producto del estudio de cuatro iniciativas, estos es, la de Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la Información Pública del Estado; la de Ley de Protección de Datos Personales para el Estado; la de Ley de Archivos Administrativos del Estado y Municipios; y la de Ley de Archivos para el Estado, todos de San Luis Potosí, con lo que se dio por hecho que se incluían las disposiciones necesarias en materia de manejo de documentos y archivos. Sin embargo, después analizar con detenimiento el tema, las comisiones dictaminadoras concluyen que existe la necesidad de regular el manejo, cuidado, resguardo y administración de los documentos que sustentan la vida institucional y sin los cuales las figuras jurídicas que se han creado alrededor del derecho a la información se encuentran a la deriva.

El manejo de información es un tópico íntimamente ligado a los archivos, se estipula que éstos deben de estar organizados pero las disposiciones que se hacen en esta materia resultan insuficientes para su óptima gestión. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado supone que se cuenta con

una estructura que puede satisfacer las necesidades que se presentan en cuanto a la administración de documentos, sin embargo en la práctica cotidiana esto resulta falso, tal como se constata en el Diagnóstico de los Archivos Públicos del Estado de San Luis Potosí, publicado en el año 2010 por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) cuyos resultados demuestran que en el estado de San Luis Potosí se cuenta con 104 archivos, de los cuales sólo 31 de los analizados se han preocupado por contar con un responsable de custodiar la documentación, 73 no han asignado a una persona que se encargue de administrarlos; considerando que aún y cuando exista un responsable en el área de archivo, esto no significa que los documentos se encuentren resguardados de manera tal que se garantice su conservación.

Por lo anterior se tiene que reconocer la ambigüedad que representa el hecho de que en el Estado de San Luis Potosí se cuenta con una Ley que garantiza el oportuno acceso a la información pública, pero no se cuenta con una legislación especial que sirva de guía para que las instituciones públicas mantengan en orden la información que producen y reciben.

Para poder tener un acceso expedito y efectivo a la información en posesión de las instituciones del Estado, es prioritario referirse a la base material que da respaldo a esta práctica; los archivos son las áreas encargadas de facilitar con rapidez la información que se solicite, por lo cual es necesario contar con un sistema de archivos moderno y funcional.

Académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas advierten que un tema de suma importancia en la administración pública es el fomento a la construcción de la memoria institucional. Reflexionan en torno a que dicha memoria no es parte de la cultura burocrática, ya que en realidad cada inicio de periodo gubernamental se vuelve a comenzar de cero, sin realmente tomar en cuenta las experiencias recabadas en la administración anterior; esto debido a que el registro documental de la acción cotidiana, la documentación pública de las decisiones y la forma en que fueron tomadas se conservan solo por el cumplimiento de los reglamentos en la materia, no por el hecho consciente de mantener debidamente organizado el acervo documental; no hay planteamientos que indiquen sistemas de producción y distribución de información formalmente establecidos.

Un paso importante se ha dado con las funciones realizadas por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), sin embargo es necesario fortalecer el marco jurídico estatal con una Ley de Archivos que especifique procedimientos de administración y preservación de los acervos documentales para poder optimizar los servicios, así como las atribuciones de las instituciones y la rendición de cuentas, y garantizar la conservación de la memoria histórica, institucional y futuro del patrimonio documental.

Los legisladores buscamos garantizar el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información al prever la clasificación y organización de documentos de manera uniforme, así como fomentar la consolidación de la memoria institucional, que a largo plazo se convertirá en fuente primordial en la construcción de la historia que brinde identidad a San Luis Potosí. Tenemos como meta impulsar los valores culturales entre los individuos propiciando la concientización del entorno social y cultural. La falta de identidad en las personas ha provocado un desarraigo que deriva en actos que impiden la cohesión social. Los habitantes descuidan su entorno debido al desconocimiento de los procesos históricos que hicieron posible el desarrollo de la sociedad a la que pertenecen, en ocasiones se carece del significado de los bienes colectivos.

Con base a lo anterior y después de analizar aspectos fundamentales de la gestión pública, es dable crear la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí, cimentando las bases que permitan a los servidores públicos trabajar eficientemente en beneficio de la sociedad. Esta Ley es resultado del análisis del marco jurídico en la materia a través de consulta y mesas de trabajo llevadas a cabo en los años 2010, 2011 y 2012, en las que participaron responsables y expertos en el manejo de información y archivos de la CEGAIP; del Poder Legislativo; del Poder Judicial a través de su Coordinación de Archivos; del Poder Ejecutivo por medio de las secretarías de, Gobierno, y Cultura; de la Coordinación Técnica Estatal para la Protección del Patrimonio Cultural (COTEPAC); del Archivo Histórico del Estado "Lic. Antonio Rocha Cordero"; del Archivo General del Estado; de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; de los ayuntamientos del

Estado; y del Archivo General de la Nación a través de la Dirección de Desarrollo y Normatividad Archivística.

Cabe destacar que la presente Ley será aplicable para toda fuente de información producida y recibida por parte de las instituciones, sin importar el formato que presente.

Existen acervos documentales privados que debido a su contenido, son de relevancia para su estudio. Estos archivos pueden ser de correspondencia particular, archivos fotográficos, obras de humanistas, escritores, historiadores, poetas y otras personas que se hayan preocupado por recabar documentos que sean fuente de información importante para la investigación histórica de San Luis Potosí. La Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí tiene como objetivo el rescate, conservación y divulgación de la información que se encuentre en este tipo de acervos, la propuesta estriba en que las personas poseedoras de estos archivos recurran a integrarse al Registro Estatal de Archivos del SEDA para que puedan recibir asesoría para la clasificación, catalogación y restauración de los documentos. Esta Ley busca concientizar a la población sobre la importancia de la conservación de la memoria histórica.

Como se señaló en líneas precedentes, tras la reforma del 18 de octubre de 2007 que adicionó el artículo 17 Bis a la Constitución local, se reconoció a la información y documentos resguardados en archivos, como el verdadero cimiento del derecho al acceso a la información, para lo que se instituyó el Sistema Estatal de Documentación y Archivos (SEDA) instancia dependiente de la CEGAIP.

En razón de lo anterior y para el buen funcionamiento de esta Ley, se fortalece al SEDA como órgano rector encargado de vigilar que se cumpla con lo establecido en la materia y proporcionar a las entidades públicas los ejes para la organización documental.

Se mantiene lo establecido en los artículos 91 y 92 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que definen al SEDA como la unidad administrativa responsable de aplicar las regulaciones que se establezcan en materia de administración y sistematización de la documentación e información en posesión de las entidades públicas, así como de dictar los lineamientos y criterios técnicos para organizar y sistematizar la integración, administración y resguardo de los archivos de trámite, concentración e histórico.

Así, el SEDA funcionará como instancia de coordinación, regulación y supervisión de las unidades de información pública y coordinadores de archivos, integradas en cada entidad junto con el apoyo de un Comité Técnico de Archivo encargado de lograr la colaboración y coordinación entre archivos públicos y privados; éste se concibe como un mecanismo de coordinación permanente para promover la unificación de criterios metodológicos, técnicos y normativos de los archivos y garantizar la preservación, conservación, organización, uso adecuado y difusión del Acervo Documental Propiedad del Estado, así como el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.

La presente Ley busca que los trabajadores responsables de manejar la información y los archivos, estén en constante capacitación para su profesionalización en la materia.

En el caso de los archivos históricos se busca promover el desarrollo integral de estas unidades. Cada unidad administrativa se encargará de contratar el personal que se adecúe a sus necesidades, sin embargo la profesionalización de los servidores públicos harán más eficientes y especializados los servicios.

En la presente Ley se sientan las bases para el manejo, resguardo, preservación y difusión de los documentos electrónicos, debido a que buscamos crear una Ley de vanguardia que esté en concordancia con los avances tecnológicos, para que de esta manera se logre la eficiencia y modernización de los servicios.

Un tópico que también es de suma importancia en el desarrollo de esta legislación, es el de realizar acciones en beneficio de la población, por lo que las personas encargadas del SEDA, COTEPAC y los archivos históricos de los sujetos obligados, deberán comprometerse con el ejercicio de la protección, difusión y fomento a la investigación de los archivos históricos.

contengan y constituyan la información pública y el Acervo Documental Histórico y Cultural del Estado; así como establecer el funcionamiento de las autoridades en materia de archivos en la entidad.

**ARTÍCULO 2º.** Todo documento sin importar su formato que sea producido por los servidores públicos en función de su cargo, así como aquellos documentos recibidos en el contexto del desempeño institucional, son bienes públicos que constituyen el Acervo Documental Propiedad del Estado, por lo que bajo ningún concepto los mismos pueden considerarse propiedad de las personas que los produjeron.

**ARTÍCULO 3º.** El Acervo Documental Propiedad del Estado será inalienable, intransferible e inembargable y no podrá salir del territorio del Estado excepto para fines de difusión e intercambio cultural, previa autorización del titular del ente responsable de su custodia y bajo las garantías de seguridad y el debido resguardo.

**ARTÍCULO 4º.** Los archivos se consideran esenciales para el ejercicio de la función pública, y representan la memoria de la actividad de un pueblo o una nación, y por tanto es responsabilidad de cada sujeto obligado mantener organizados los documentos para su fácil localización, consulta y reproducción, haciendo uso de métodos y técnicas archivísticas para la sistematización de la información, así como el uso de nuevas tecnologías aplicables en la administración de documentos.

**ARTÍCULO 5º.** Los principios archivísticos que deberán observar los sujetos obligados en el funcionamiento, regulación, organización, difusión y conservación de la documentación e información generada bajo su resguardo, son:

- I. Orden original: Respetar la clasificación archivística y el orden establecido por la unidad generadora;
- II. Procedencia: Mantener cada fondo documental producido por una dependencia o entidad y distinguirlo de otros fondos semejantes;
- III. Disponibilidad: Adopción de medidas pertinentes para una pronta localización de documentos de archivo;
- IV. Conservación: Acciones directas e indirectas que buscan la adecuada preservación de los archivos para que mantengan íntegras sus propiedades tangibles e intangibles, proporcionando las condiciones administrativas y tecnológicas adecuadas;
- V. Transparencia: Asegurar que la información documental contenida en los archivos de trámite y concentración sea manejada de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, y
- VI. Confidencialidad: Respeto por los datos personales relativos a características e información susceptible de ser tutelada por los derechos humanos a la privacidad, intimidad, honor y dignidad, que se encuentre en posesión de algunos de los sujetos obligados y sobre la que no puede realizarse ningún acto o hecho, sin la autorización debida de los titulares o sus representantes legales.

**ARTÍCULO 6º.** Los objetivos específicos de esta Ley son:

- I. Garantizar la localización y disposición de documentos a través de sistemas modernos de organización y conservación de los archivos;
- II. Contribuir a la eficiencia administrativa, la correcta gestión gubernamental y el avance institucional;
- III. Asegurar el acceso oportuno a la información y con ello la rendición de cuentas, mediante la adecuada administración y custodia de los archivos que contienen información pública;
- IV. Conservar, organizar y facilitar la consulta de los archivos administrativos e históricos, atender las necesidades de la gestión pública, al igual que promover la investigación histórica documental;

contengan y constituyan la información pública y el Acervo Documental Histórico y Cultural del Estado; así como establecer el funcionamiento de las autoridades en materia de archivos en la entidad.

ARTÍCULO 2º. Todo documento sin importar su formato que sea producido por los servidores públicos en función de su cargo, así como aquellos documentos recibidos en el contexto del desempeño institucional, son bienes públicos que constituyen el Acervo Documental Propiedad del Estado, por lo que bajo ningún concepto los mismos pueden considerarse propiedad de las personas que los produjeron.

ARTÍCULO 3º. El Acervo Documental Propiedad del Estado será inalienable, intransferible e inembargable y no podrá salir del territorio del Estado excepto para fines de difusión e intercambio cultural, previa autorización del titular del ente responsable de su custodia y bajo las garantías de seguridad y el debido resguardo.

ARTÍCULO 4º. Los archivos se consideran esenciales para el ejercicio de la función pública, y representan la memoria de la actividad de un pueblo o una nación, y por tanto es responsabilidad de cada sujeto obligado mantener organizados los documentos para su fácil localización, consulta y reproducción, haciendo uso de métodos y técnicas archivísticas para la sistematización de la información, así como el uso de nuevas tecnologías aplicables en la administración de documentos.

ARTÍCULO 5º. Los principios archivísticos que deberán observar los sujetos obligados en el funcionamiento, regulación, organización, difusión y conservación de la documentación e información generada bajo su resguardo, son:

- I. Orden original: Respetar la clasificación archivística y el orden establecido por la unidad generadora;
- II. Procedencia: Mantener cada fondo documental producido por una dependencia o entidad y distinguirlo de otros fondos semejantes;
- III. Disponibilidad: Adopción de medidas pertinentes para una pronta localización de documentos de archivo;
- IV. Conservación: Acciones directas e indirectas que buscan la adecuada preservación de los archivos para que mantengan íntegras sus propiedades tangibles e intangibles, proporcionando las condiciones administrativas y tecnológicas adecuadas;
- V. Transparencia: Asegurar que la información documental contenida en los archivos de trámite y concentración sea manejada de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, y
- VI. Confidencialidad: Respeto por los datos personales relativos a características e información susceptible de ser tutelada por los derechos humanos a la privacidad, intimidad, honor y dignidad, que se encuentre en posesión de algunos de los sujetos obligados y sobre la que no puede realizarse ningún acto o hecho, sin la autorización debida de los titulares o sus representantes legales.

ARTÍCULO 6º. Los objetivos específicos de esta Ley son:

- I. Garantizar la localización y disposición de documentos a través de sistemas modernos de organización y conservación de los archivos;
- II. Contribuir a la eficiencia administrativa, la correcta gestión gubernamental y el avance institucional;
- III. Asegurar el acceso oportuno a la información y con ello la rendición de cuentas, mediante la adecuada administración y custodia de los archivos que contienen información pública;
- IV. Conservar, organizar y facilitar la consulta de los archivos administrativos e históricos, atender las necesidades de la gestión pública, al igual que promover la investigación histórica documental;

así como sus plazos de conservación, vigencia y clasificación como público, reservado o confidencial, y su destino final;

XII. CEGAIP: Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí;

XIII. Clasificación archivística: Proceso de identificación y organización de expedientes en categorías de acuerdo con esquemas previamente establecidos, métodos y reglas determinadas en un sistema de clasificación con base en la estructura orgánica y funcional de los sujetos obligados;

XIV. Comité de información: Órgano colegiado integrado en las entidades públicas, para resolver la información que deberá

XV. Comité Técnico de Archivo: Órgano consultivo del SEDA;

XVI. Conservación de archivos: Conjunto de procedimientos, medidas y acciones destinados a asegurar la preservación y la prevención de alteraciones físicas del soporte y de la información de los documentos de archivo;

XVII. Consulta documental: Acceso público a los documentos de archivo que generen o reciban los sujetos obligados;

XVIII. COTEPAC: Coordinación Técnica Estatal de Protección del Patrimonio Cultural, dependiente de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado;

XIX. Cuadro general de clasificación archivística: Instrumento de descripción que refleja la estructuración de las series documentales de un archivo que aporta datos fundamentales sobre dicha estructura, tales como códigos y niveles que apoyan su organización, respaldado por el SEDA;

XX. Destino final: Identificación de las series documentales y expedientes cuyo plazo de conservación o uso ha prescrito, con el fin de darlos de baja o transferirlos a un archivo histórico;

XXI. Declaratoria de Patrimonio Documental, Histórico y Cultural del Estado: De acuerdo con la Ley de Protección del Patrimonio Cultural del Estado de San Luis Potosí consiste en el reconocimiento por parte del Poder Ejecutivo de que un documento, colección o unidad de archivo, es de trascendencia histórica y forma parte de la memoria histórica del Municipio, el Estado o la Nación;

XXII. Documentación activa: Aquellos documentos de interés público necesarios para el ejercicio de las funciones de las unidades administrativas y de uso frecuente, que se conserva en el archivo de trámite;

XXIII. Documento: Registros que documentan y dan testimonio de la existencia y actividades de los sujetos obligados, y de las personas físicas o morales en el pasado o en el presente, sin excepción de su fuente de origen, tipo o fecha de elaboración. Los documentos pueden ser de cualquier medio o formato;

XXIV. Documento histórico: Aquel documento que habiéndose determinado su destino final, es transferido a un archivo histórico, por contener información relevante para la institución generadora pública o privada, y que se considera fundamental en la construcción y conservación de la memoria histórica del Estado;

XXV. Documento de archivo digital o electrónico: La representación de un documento de archivo a través de valores binarios diferenciados y que requiere el uso de un equipo electrónico para ser inteligible por una persona;

XXVI. Estado: Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

XXVII. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados y relacionados de acuerdo con un mismo asunto, actividad o trámite en un sujeto obligado;

## CAPÍTULO II

### DE SUS OBLIGACIONES

ARTÍCULO 9º. Los documentos producidos, recibidos o custodiados por los sujetos obligados, quedan fuera del comercio.

ARTÍCULO 10. Todos los documentos sin importar su formato; que sean producidos o recibidos por los sujetos obligados deberán tener una correcta administración archivística, con la finalidad de cumplir y sustentar las funciones de las instituciones, optimizar los trámites, la gestión de asuntos, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, así como representar una fuente indispensable para la investigación.

ARTÍCULO 11. Los sujetos obligados productores del Acervo Documental Propiedad del Estado, serán responsables del manejo directo y conservación de sus documentos, y tendrán las siguientes obligaciones:

I. Implementar los métodos archivísticos en todos los documentos que conforman el Acervo Documental Propiedad del Estado, recibidos o conservados de conformidad con sus funciones y a lo largo de su ciclo de vida, de acuerdo a esta Ley y los lineamientos establecidos por el SEDA;

II. Adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos y sus contenidos;

III. Vigilar y disponer la correcta adecuación de las instalaciones de archivo para la mejor conservación y custodia de los documentos;

IV. Adecuar correctamente las instalaciones de su archivo para garantizar la conservación y custodia de los documentos, en términos de las directrices que al efecto emita el SEDA;

V. Establecer los lineamientos para brindar los servicios de consulta y reprografía al público usuario;

VI. Hacer constar en las actas de los procesos de entrega-recepción, por medio de inventarios y expedientes, el acervo documental recibido, producido y resguardado durante la administración saliente, y su existencia y recepción por la administración entrante;

VII. Asegurar el adecuado mantenimiento de los documentos, garantizando la integridad física y funcional de toda la documentación desde el momento de la emisión, durante su periodo de vigencia, hasta su disposición final, y

VIII. Establecer mediante reglamentos o acuerdos de carácter general los órganos, criterios y procedimientos institucionales relativos a la administración de sus respectivos archivos, de acuerdo con los principios y reglas establecidas en la presente Ley.

ARTÍCULO 12. Los sujetos obligados deberán crear sus propios archivos administrativos e históricos.

Con independencia de los presupuestos asignados, podrán gestionar los recursos humanos y materiales necesarios ante autoridades federales, estatales y municipales, así como personas físicas y morales de los sectores social y privado, mediante convenios o instrumentos disponibles, para proporcionar una adecuada conservación de los documentos y un eficiente servicio de acceso a la información pública.

En el caso de que los archivos se encuentren en riesgo o resulte inoperable su administración, los sujetos obligados mediante acuerdo de sus autoridades competentes podrán ceder su custodia temporal o permanente al Archivo General del Estado o al Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí.

ARTÍCULO 13. Los sujetos obligados deberán nombrar un Coordinador de Archivos, encargado de ejecutar y vigilar la aplicación de la presente Ley al interior de cada dependencia o entidad, así como de vincularse con el SEDA. Dichos coordinadores de archivo, en términos de sus leyes orgánicas o reglamentos internos, serán los responsables de supervisar la organización de los archivos al interior de sus dependencias y de elaborar los instrumentos de control archivístico, de acuerdo a los manuales y lineamientos que se elaboren para tal efecto por el Comité Técnico de Archivo.

ARTÍCULO 14. Los archivos administrativos e históricos contarán, al menos, con los siguientes instrumentos archivísticos:

- I. Cuadro General de Clasificación;
- II. Catálogo de Disposición Documental;
- III. Inventarios Documentales, y
- IV. Guía Simple de Archivos.

### TÍTULO TERCERO DEL SISTEMA ESTATAL DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS, DE LOS COMITÉS Y DEL REGISTRO ESTATAL DE ARCHIVOS

#### CAPÍTULO I

#### DEL SISTEMA ESTATAL DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS

ARTÍCULO 15. El SEDA es el órgano de la CEGAIP, responsable de vigilar el cumplimiento de la presente ley, y de aplicar las regulaciones que se establezcan en materia de administración y sistematización de la documentación e información en posesión de los sujetos obligados; para regular y supervisar la función archivística y el eficiente desarrollo de la administración de documentos y organización de archivos en el Estado.

La CEGAIP al elaborar su proyecto de presupuesto de egresos contemplará las provisiones de gasto y los recursos necesarios para el debido cumplimiento de las funciones encomendadas al SEDA.

ARTÍCULO 16. El SEDA será el responsable de asegurar la colaboración y coordinación entre archivos públicos y privados para promover la unificación de criterios metodológicos, técnicos y normativos de los archivos y garantizar la preservación, conservación, organización, uso adecuado, capacitación en materia archivística y fomento a la difusión del Acervo Documental Propiedad del Estado; así como el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.

ARTÍCULO 17. El SEDA tendrá los objetivos siguientes:

- I. Fomentar la modernización y homogeneización metodológica de la función archivística propiciando la cooperación e integración de los archivos;
- II. Asegurar que los sujetos obligados lleven a cabo una correcta gestión y preservación de la información documental;
- III. Establecer las normas de la actividad archivística, de manera que se garantice la integridad del ciclo documental;
- IV. Favorecer la realización de acciones que permitan el perfeccionamiento de la política estatal de archivos;

V. Impulsar la sensibilización de la sociedad sobre la importancia de los archivos como centros de información esenciales para la misma, y de los históricos, como parte fundamental de la memoria histórica y fuente de información para investigaciones, y

VI. Promover la profesionalización del personal de los archivos del Estado.

ARTÍCULO 18. Además de las establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, son atribuciones del SEDA:

I. Aprobar y registrar los instrumentos de control archivístico de los sujetos obligados;

II. Registrar los catálogos de vigencia de los documentos del sector público;

III. Vigilar que se implementen los lineamientos, normas y técnicas en materia de administración de documentos y archivos;

IV. Promover cursos de capacitación, actualización y la profesionalización del personal de los archivos que requiera de ello;

V. Promover el desarrollo del marco jurídico para sustentar las funciones de los archivos, la preservación del Acervo Documental Propiedad del Estado, y la coordinación entre los archivos de los sujetos obligados;

VI. Promover la celebración de convenios con los sujetos obligados y los poseedores o representantes de archivos particulares para la asesoría archivística y el fomento a su consulta;

VII. Actualizar permanentemente la normatividad archivística como fundamento de las tareas de clasificación, ordenación, valoración, descripción, conservación y difusión del acervo documental de los archivos de los sujetos obligados;

VIII. Compilar las normas que rigen la administración de documentos y promover su difusión a todo el personal que tenga relación con ellos;

IX. Promover y supervisar las investigaciones de nuevas técnicas de administración de documentos;

X. Promover ante el Comité Técnico de Archivo la propuesta para que un documento o acervo documental obtenga la Declaratoria de Patrimonio Documental Histórico y Cultural por parte del titular del Ejecutivo;

XI. Supervisar que las donaciones, depósitos y legados de documentos históricos se lleven de acuerdo a esta Ley;

XII. Promover la adopción por parte del sector público, de las medidas organizativas y técnicas que aseguren la conservación de la información electrónica;

XIII. Publicar y distribuir las obras y colecciones necesarias para apoyar el conocimiento de los acervos, la renovación y promoción de la cultura archivística, administrativa e histórica y la consulta y aprovechamiento del Acervo Documental Propiedad del Estado;

XIV. Elaborar un programa anual de trabajo que permita evaluar sus indicadores de gestión;

XV. Elaborar su plan anual de trabajo y su Programa Operativo Anual, y remitirlos al Pleno de la CEGAIP para ser considerados en la realización del proyecto de presupuesto de egresos de la CEGAIP;

XVI. Expedir y publicar los lineamientos generales y manuales que regulen las actividades de organización y conservación documental previstas en esta Ley;

XVII. Organizar, previa convocatoria del Comité Técnico de Archivo, las reuniones de los titulares de los archivos inscritos en el Registro Estatal de Archivos;

XVIII. Entregar en el mes de septiembre ante el Comité Técnico de Archivo, el Pleno y la Contraloría de la CEGAIP, su informe anual de actividades;

XIX. Vincularse con el Archivo General de la Nación para el intercambio de información, adhesión a proyectos y suscripción de convenios que tengan por objeto alguno de los fines de esta Ley;

XX. Ejecutar los acuerdos del Comité Técnico de Archivo;

XXI. Celebrar convenios con instituciones distintas a los sujetos obligados que coadyuven al cumplimiento de la presente Ley, y

XXII. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 19. El Director General del SEDA durará en su encargo cuatro años y podrá ser ratificado en el encargo en una sola ocasión por un periodo igual.

ARTÍCULO 20. Para ser Director General del SEDA se requiere:

I. Ser ciudadano potosino en los términos de la Constitución Política del Estado;

II. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso;

III. Tener al menos treinta años cumplidos al día de su elección;

IV. Ser profesionista con título legalmente expedido, con experiencia mínima de tres años en el ejercicio profesional;

V. Contar con estudios o experiencia comprobada en materia archivística, bibliotecología, ciencias de la información o historia;

VI. No haber sido condenado en procedimientos de responsabilidad por alteración, destrucción, sustracción, ocultamiento o comercialización de documentos, en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y

VII. No haber sido Gobernador del Estado, Secretario de Gobierno, Procurador de Justicia del Estado, Senador, Diputado federal o local, Presidente Municipal, o dirigente de un partido político o asociación religiosa, durante los dos años previos al día de su elección.

ARTÍCULO 21. El Director General del SEDA será electo por el pleno de la CEGAIP y por unanimidad de votos. Para el efecto, la CEGAIP convocará públicamente a concurso de oposición, proponiendo una terna con los aspirantes mejor evaluados de entre los que elegirá.

## CAPÍTULO II

### DEL COMITÉ TÉCNICO DE ARCHIVO

ARTÍCULO 22. El Comité Técnico de Archivo se integrará de la siguiente manera:

I. El titular del Archivo Histórico del Estado;

II. El titular del Archivo General del Estado;

III. El titular de la COTEPAC ;

IV. El **Coordinador** de Archivos del Poder Judicial;

V. El **Coordinador** de Archivos del Poder Legislativo;

VI. El Coordinador de Archivos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí;

VII. El Coordinador de Archivos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos;

VIII. El **Coordinador** de Archivos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana;

IX. El **Director** General del SEDA, y

X. Los representantes de los municipios según lo establecido por el Reglamento del Comité Técnico de Archivo.

ARTÍCULO 23. Se podrán integrar al Comité Técnico de Archivo, aquellas personalidades de los sectores público, social o privado que por sus actividades en el rubro, el mismo Comité considere y resuelva, deban integrarlo; los que tendrán igualdad de derechos y obligaciones.

ARTÍCULO 24. El Comité Técnico de Archivo estará integrado por un presidente y un vicepresidente electos por mayoría de entre sus miembros, el secretario será el Director General del SEDA quien en ningún tiempo podrá ocupar el cargo de presidente o vicepresidente. Los demás integrantes fungirán como vocales; todos los cargos serán honoríficos y tendrán que ser notificados por escrito. El Comité Técnico de Archivo deberá ser renovado o ratificado cada dos años.

ARTÍCULO 25. El Comité Técnico de Archivo celebrará reuniones ordinarias de forma trimestral y de manera extraordinaria cuando alguno de sus integrantes lo solicite.

ARTÍCULO 26. Las reuniones se realizarán con la asistencia de la mayoría de sus miembros y las decisiones se tomarán por mayoría de votos. En caso de empate el presidente tendrá el voto de calidad.

ARTÍCULO 27. A las reuniones del Comité Técnico de Archivo podrán asistir como invitados, previo acuerdo de sus integrantes, los servidores públicos o particulares que por su vinculación con los archivos y el acceso a la información, se considere necesaria su presencia, los cuales asistirán con voz pero sin voto.

ARTÍCULO 28. El Comité Técnico de Archivo podrá sesionar en cualquier lugar del Estado previo acuerdo de sus integrantes.

ARTÍCULO 29. El Comité Técnico de Archivo tendrá las atribuciones siguientes:

I. Proponer mecanismos de consulta y resguardo de los documentos existentes en los Archivos del Estado;

II. Promover políticas, técnicas y lineamientos que permitan organizar, clasificar, catalogar, preservar e investigar el acervo documental existente en los archivos del Estado facilitando y promoviendo su consulta y aprovechamiento públicos;

III. Analizar las técnicas y los criterios de valoración de documentos;

IV. Aprobar la propuesta de declaración presentada por el SEDA por medio de la cual un documento o acervo documental, pueda ser considerado para la obtención de la Declaratoria de Patrimonio Documental y promoverla ante la COTEPAC;

V. Valorar y aprobar las bajas documentales y el destino final de la documentación generada por el sector público;

VI. Determinar lineamientos para diseñar, integrar, mantener y difundir registros, inventarios y catálogos de los documentos y fuentes relevantes para la historia, existentes en otros archivos y colecciones públicas y privadas, nacionales o del extranjero;

VII. Realizar estudios y emitir opiniones sobre la conservación y restauración de documentos de los archivos del sector público y privados;

VIII. Convocar al menos una vez al año a una reunión de los archivos inscritos en el Registro Estatal de Archivos, con la finalidad del intercambio de experiencias en la labor archivística;

IX. Recibir y aprobar el informe del SEDA, y

X. Emitir observaciones sobre el informe anual de actividades del SEDA, debiéndolas hacer del conocimiento del Pleno de la CEGAIP.

ARTÍCULO 30. Son atribuciones del presidente del Comité Técnico de Archivo:

- I. Dirigir el funcionamiento del Comité Técnico de Archivo así como representarlo, y
- II. Entregar por escrito al Pleno de la CEGAIP la evaluación al informe anual de actividades y metas alcanzadas por el SEDA.

ARTÍCULO 31. Son atribuciones del vicepresidente del Comité Técnico de Archivo:

- I. Suplir las ausencias temporales del presidente del Comité Técnico de Archivo, y
- II. Auxiliar al presidente del Comité Técnico de Archivo en sus funciones.

ARTÍCULO 32. Son atribuciones del Secretario del Comité Técnico de Archivo:

- I. Convocar a los integrantes del Registro Estatal de Archivos a sus reuniones ordinarias y extraordinarias;
- II. Auxiliar al presidente y vicepresidente del Comité Técnico de Archivo en sus funciones, y
- III. Validar las actas del Comité Técnico de Archivo.

ARTÍCULO 33. Son atribuciones de los vocales del Comité Técnico de Archivo:

- I. Cumplir los acuerdos del Comité, y
- II. Asistir con derecho a voz y voto a las sesiones del Comité.

### CAPÍTULO III

#### DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN

ARTÍCULO 34. Los sujetos obligados para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de esta Ley, se auxiliarán del Comité de Información a que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

ARTÍCULO 35. El Comité de Información, además de las establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, tendrá las atribuciones siguientes:

- I. Vigilar y dictaminar los procesos de depuración, transferencia y valoración documental;